

censo perteneciente á estas, que gravaba la casa calle de la Luna número 16 de la ciudad Ciudad y de la propiedad de aquel consistiendo en la redención y consiguiente cancelación del gravámen. — Resultando: que presentada una copia de dicha escritura en el Registro de la Propiedad de San Juan Bautista fué devuelta con nota denegatoria porque estando ordenada la desamortización de los bienes pertenecientes al clero secular y regular se dispuso por la Intendencia General el cumplimiento de lo prevenido por el artículo 11 de la Ley de Presupuestos de 1882 ó sea la incautación por el Estado de todos los censos y bienes del clero y como quiera que al tratarse de dichos bienes la regla general es la contenida en las leyes de 1º de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, ó sea que al Estado compete exclusivamente la clasificación de aquellos que vienen comprendidos en la desamortización, mientras no resulte tal formalidad carece el clero de capacidad jurídica para otorgar la cancelación; cuyo defecto es insubsanable á los efectos del artículo 82 de la ley hipotecaria. — Resultando: que contra la anterior nota interpuso Don Pedro Cobreros el presente recurso, alegando: que las leyes dictadas para la Península solo son aplicables á las Antillas cuando media disposición especial del Ministro de Ultramar; que las desamortizadoras de 1º de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856 no se hallan vigentes en Puerto-Rico por no haber sido promulgadas en esta isla: que el Real Decreto de 8 de Marzo de 1836 suprimiendo los monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas, salvo señaladas excepciones no se refiere á Ultramar según su artículo 1º y si tan solo á la Península, islas adyacentes y posesiones de Africa por lo cual ninguno de sus preceptos se ha cumplido en Puerto-Rico; que apesar de esto los Gobernadores de Cuba y Puerto-Rico secularizaron los religiosos varones y suprimieron los conventos á estos pertenecientes en 1841 aprobándose tácitamente por el Gobierno esa medida, quedando subsistente el único convento de religiosas de la isla, sin perturbación alguna en sus bienes, derechos y rentas, reconocidos por el mismo Registrador que ha hecho la traslación de los asientos de dominio de aquellos al moderno Registro, sin pretensión alguna del Estado, quien tampoco se ha incautado de ellos; que la Real orden de 1º de Julio de 1843 declara que la ley desamortizadora de 2 de Septiembre de 1841 no comprende á las provincias de Ultramar; que en 31 de Octubre de 1863 se dictó un Real Decreto en cuyo preámbulo declara el Ministro de Ultramar que no era posible aplicar desde luego el principio de la desamortización por ciertas razones: que la Real orden de 27 de Julio de 1865 declara que el Gobierno se propone activar por todos los medios posibles la completa desamortización civil y eclesiástica que la de 6 de Septiembre de 1866 que hizo extensivo á Puerto-Rico el Real Decreto y Reglamento vigente en Cuba de 18 de Julio de 1862 se refiere solo á la desamortización de bienes procedentes de las órdenes religiosas extinguidas en la pequeña Antilla y no de las existentes ni del clero secular; que el artículo 11 de la Ley de Presupuestos para la isla de Puerto-Rico de 7 de Julio de 1882 se refiere solo á dichas órdenes religiosas extinguidas y no se ocupa de la incautación por el Estado de todos los bienes y censos del clero, y que habiendo contratado con quien aparece dueño del censo, según el Registro, es válido el contrato según el artículo 34 de la Ley hipotecaria. — Resultando: que oído el Registrador de la Propiedad sostuvo su nota que fundó en que con el fin de solucionar las dificultades con que tropezaba la Administración para cumplir las disposiciones sobre desamortización eclesiástica se ordenó por el Ministerio de Ultramar en 27 de Julio de 1885 la formación de una Junta que estudiara y propusiera la solución procedente; que á virtud de consulta sobre varios extremos para activar la desamortización civil y eclesiástica se dictó la Real orden de 1º de Septiembre de 1883 declarando que la legislación vigente para la desamortización de bienes del Estado en Puerto-Rico es el Reglamento de 18 de Julio de 1862, reformado por Real orden de 9 de Julio de 1882 por virtud de la que debía haberse procedido con la mayor actividad á la formación y remisión del nuevo Reglamento recordado por la Real orden de 4 de Agosto siguiente disponiendo con la mayor urgencia el cumplimiento de lo mandado y que la liquidación se haga por la Hacienda á la vez que la incautación limitándose á recaudar los atrasos que están en descubierto y las rentas corrientes en virtud de cuyas disposiciones se dictó por la Intendencia general de Hacienda con arreglo á lo dispuesto por el Gobernador General, circular dirigidas á los Alcaldes con fecha 21 de Julio de 1883 para que se activara la desamortización; disposiciones todas que demuestran que esta se hizo extensiva á Puerto-Rico. — Resultando: que el Juez delegado dejó sin efecto la nota recurrida y apelado este acuerdo por el Registrador fué confirmado por el Presidente de la Audiencia de Puerto-Rico, por considerar que las citas legales, aducidas por dicho funcionario, no son pertinentes pues las leyes de 1º de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856 no han sido aplicadas á la pequeña Antilla, sin que en las demás disposiciones citadas se ordene la desamortización de los bienes de las comunidades religiosas de mujeres establecidas en Ultramar; que tales bienes no fueron ni pudieron ser objeto de la desamortización civil invocada por el propio Registrador; que como se trata de un censo constituido é inserto á favor de monjas no puede tenersele como comprendido en la desamortización decretada para los bienes del clero regular; que los de aquellas no son de confundir con los del clero secular,

los cuales tampoco han sido desamortizados, pudiendo este conservarlos y basta adquirir otros en virtud de las facultades otorgadas á la iglesia en el concordato de 1851 y posteriores convenios celebrados en la Santa Sede; que la circunstancia de que la desamortización ordenada para la isla de Puerto-Rico no alcanzó á los bienes de las monjas, se comprueba con el texto del Real Decreto de 18 de Junio de 1862 del Reglamento para su ejecución del artículo 11 de la Ley de Presupuestos de 7 de Julio de 1882 y del 4º de la de 5 de Agosto de 1886; que el hecho de haberse mandado investigar que bienes desamortizados pertenecen al Estado no afecta en modo alguno el derecho que dichas Religiosas tienen sobre los suyos y que no hay disposición alguna legal que haya suspendido el ejercicio de este decreto y por el contrario se reconoce de un modo general y claro en el artículo 38 del Código Civil y en la Real orden de 4 de Diciembre de 1890. — Considerando: que las disposiciones en que se acordaba la desamortización de los bienes pertenecientes al clero regular que sirven de fundamento á la nota denegatoria del Registrador no son de aplicación tratándose de una comunidad de religiosas y que no habiéndose suprimido ni extinguido en fecha alguna la de que se trata, tampoco le son aplicables las disposiciones que con exclusiva aplicación á las extinguidas órdenes religiosas se han dictado posteriormente. — Considerando: que por no haberse aplicado en fecha alguna á Ultramar las leyes de 1º de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856 tampoco pueden invocarse en favor de supuestos derechos del Estado que tengan su origen en ellos para negar capacidad á la comunidad de Religiosas que otorgó la cancelación discutida. — Considerando: que el carácter exclusivo de las disposiciones desamortizadoras dictadas para el clero regular en las Antillas, han sido confirmado por la sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo de 2 de Julio de 1894, revocando la Real orden de 22 de Noviembre de 1892 en que se dispuso extender sus efectos al clero secular y que por tanto tampoco estaba en lo cierto el Registrador al afirmar lo contrario en su nota. — Considerando: que tanto el Código Civil en su artículo 38 como las disposiciones en su consecuencia dictadas, aseguran la validez del acto realizado por las Religiosas Carmelitas por medio de su legítima representación con las autorizaciones legales precisas y en uso de su perfecto derecho, ya reconocido anteriormente por el mismo Registrador que inscribió á nombre de la comunidad los derechos hoy discutidos: esta Sección ha acordado confirmar la providencia apelada. — Lo que con devolución del expediente original comunico á V. I. á los efectos oportunos. — Dios guarde á V. S. I. muchos años. — Madrid, 17 de Abril de 1896. — El Jefe de la Sección, *Julio García del Busto*. — Sr. Presidente de la Audiencia de Puerto-Rico.

Y acordado por S. S. I. en decreto de esta fecha se guarde y cumpla lo resuelto por la Sección y que se publique en la GACETA OFICIAL de esta Isla para dar cumplimiento á lo que previene el artículo 125 del Reglamento hipotecario, de su orden expido el presente en

Puerto-Rico á 4 de Mayo de 1896. — El Secretario de Gobierno, *José M^a Velez*. [950]

El Ilmo. Sr. Presidente, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 269 de la Ley Hipotecaria, por decreto de esta fecha ha designado al Juez de 1ª Instancia del distrito de la Catedral Don Rafael Nieto y Abeillé, Decano de los de esta Capital, como Delegado para la inspección del Registro de la Propiedad de la misma y demás efectos reglamentarios.

Lo que de orden de S. S. I. se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, 12 de Mayo de 1896. — El Secretario de Gobierno, *José M^a Velez*. (1022)

Diputación Provincial de Puerto-Rico.

BASES

acordadas para regir en la nueva concesión de los dos mil billetes de la Lotería Provincial, á partir del sorteo ordinario número 349, correspondiente al 20 de Julio de 1896, y terminará con el último sorteo del mes de Agosto de 1898:

1ª—Ascendiendo á 32.000 billetes el número de los que constará la Lotería Provincial, á partir del sorteo número 349 correspondiente al 20 de Julio del año actual, los dos mil billetes cuyo aumento se tiene acordado, se adjudicarán por medio de una rifa que se verificará en la forma siguiente:

1ª Se hará una tirada de diez mil papeletas, ó más si fuere necesario, cuyas papeletas numeradas correlativamente, al precio cada una de cincuenta centavos, y representando una suerte para tomar parte en el sorteo, serán expedidas libremente á toda persona que lo solicite, previo pago de su importe y sin limitación de número para la adquisición; si bien la venta se hará por orden correlativo en la Administración de la Lotería y en las horas hábiles de oficina; dando principio aquella, previo aviso oficial en la forma acostumbrada y terminando á las cuatro en punto de la tarde de la víspera ó día anterior al sorteo.

2ª Cerrada la venta de papeletas, se fijará en el exterior del edificio provincial para conocimiento del

público, un aviso oficial del número de las que han sido vendidas, cuyo número servirá de base para el sorteo de acciones.

Las papeletas que no sean vendidas, quedarán nulas y no entrarán en sorteo; de modo que, todo número que salga mayor al del último vendido, será nulo y por consiguiente se repetirá cuantas veces sea necesario, y

3ª El sorteo que habrá de celebrarse, tendrá por objeto la adjudicación de veinte acciones de cien billetes cada una, y en su consecuencia se creará un turno especial compuesto de cuarenta números que entrarán en suerte. Los primeros veinte números que salgan corresponderán á la adjudicación de dichas acciones; y los otros veinte restantes, constituirán el turno de reserva para las acciones de esta nueva adjudicación que vayan caducando.

2ª—La nueva concesión de veinte acciones se considerará adicional á la que dió principio en 20 de Septiembre del año próximo pasado y empezarán á regir para los nuevos concesionarios desde el sorteo número 349 correspondiente al 20 de Julio próximo y terminarán con el último que se celebrará en el mes de Agosto de 1898.

3ª—Es requisito indispensable que los nuevos concesionarios consignen en las Cajas de la Tesorería Provincial, la suma de veinte y cinco pes s por cada acción, cuya cantidad, en concepto de depósito, quedará en garantía del cumplimiento de su compromiso y por todo el tiempo que dure la concesión.

Están obligados aquéllos á tomar en todos los sorteos los billetes, el día que señale la Administración para recogerlos, satisfaciendo previamente su importe al contado con el descuento de tres por ciento que ya se tiene concedido sobre el valor de cada acción.

4ª—Transcurridos los días señalados para recoger los billetes y pagar su importe se entenderá caducada la concesión de los que no lo hayan verificado, y los concesionarios perderán desde luego el depósito á que se contrae la base anterior.

5ª—En caso de que se disminuya el número de billetes, sufrirán la rebaja los últimos concesionarios ó los que les hayan sustituido en virtud del turno especial de reserva creado.

6ª—Si el Estado, porque así conviniera á sus intereses, suprimiese la Lotería, ó se reservase su administración, caducarán de hecho las concesiones de acciones, sin que los Tenedores puedan alegar derecho alguno en ningún tiempo, ni intentar reclamaciones contra el Estado ó la Provincia.

7ª—El sorteo de las veinte acciones se celebrará el día 15 de Junio próximo á las nueve de la mañana, ante la Junta que determina el artículo 10 del Reglamento de Lotería y bajo la Presidencia del Sr. Vice-Presidente de la Comisión Provincial.

En el mismo día se hará público el resultado del sorteo en la forma acostumbrada; bien entendido que los tenedores de las papeletas que resulten agraciadas, están obligados á presentarlas en la Administración de la Lotería, durante los días hábiles, hasta el veinte y cinco inclusive del citado mes de Junio próximo, pues si no lo verificasen se entenderá caduca la acción, adjudicándose al turno especial de reserva creado al efecto para este sorteo.

8ª—El sorteo se verificará por medio del aparato especial que se usó en el sorteo de acciones que se celebró en el pasado año.

9ª—La venta de papeletas empezará el diez y seis de Mayo próximo.

Puerto-Rico, 9 de Mayo de 1896. — El Vice-Presidente de la Comisión Provincial, *Manuel Egozcue*. [948] 3-3

Administración de la Lotería provincial

DE PUERTO-RICO.

RIFA DE ACCIONES.

El día 16 del corriente, dará principio la venta en esta Administración, durante las horas de oficina (7½ á 10 mañana y de 1 á 3 tarde) todos los días no feriados, de las papeletas para tomar parte en la Rifa acordada por la Excm. Corporación Provincial, para adjudicar veinte acciones de 100 billetes de la Lotería Provincial cada una, cuyo sorteo tendrá lugar á las 9 de la mañana del día 15 de Junio próximo, en el Salón de sesiones de la Corporación.

Los veinte números que en primer lugar salgan, corresponderán correlativamente por orden de extracción á las acciones, é igual número siguientes para el turno de reserva creado para las mismas.

La concesión empieza con el sorteo ordinario número 349 de 20 de Julio del año actual y terminará con el último sorteo del mes de Agosto de 1898.

Las bases por que se regirá la concesión durante dicho plazo, se encuentran publicadas en la GACETA OFICIAL, y además podrán las personas que lo deseen examinarlas en la Contaduría de esta Administración en las horas de oficina.

El importe de cada papeleta es de CINCUENTA CENTAVOS, MONEDA ESPECIAL; representa un solo número ó suerte valedera al portador, caduca á las cuatro de la tarde del día 25 de Junio próximo, pues fenecido dicho plazo, las no presentadas para